

**Voces:****FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD ~ MEDIDAS CAUTELARES ~ MUNICIPALIDAD ~ TASA MUNICIPAL****Tribunal:** Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III(CFedLaPlata)(SalaIII)**Fecha:** 29/04/2025**Partes:** Municipalidad de Presidente Perón c. Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio - Estado Nacional y otro s/ amparo Ley 16.986**Publicado en:** La Ley Online;**Cita:** TR LALEY AR/JUR/51092/2025**Sumarios:**

1. La ejecución de los actos administrativos que prohíben la inclusión de tasas municipales en la factura del servicio de electricidad puede configurar una interferencia u obstaculización en la autonomía económica y financiera del municipio, al afectar la recaudación tributaria instrumentada mediante un mecanismo legalmente habilitado. El peligro en la demora se advierte acreditado a través de las secuelas que derivarían de la intempestiva interrupción del mecanismo de recaudación, cuyos fondos son destinados al funcionamiento de servicios esenciales que el municipio presta a su comunidad.

**Texto Completo:**

Expediente N° 24.897/2024/CA1

**2ª Instancia.-** La Plata, abril 29 de 2025.

Considerando: I. El objeto de la causa.

La Municipalidad de Presidente Perón promovió acción de amparo contra el Ministerio de Economía de la Nación (Secretaría de Industria y Comercio) y el Ente Regulador de la Electricidad (en adelante ENRE), a fin de declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nros. 267/2024 y 708/2024 dictadas, respectivamente, por aquella Secretaría y el mencionado ente regulador.

Junto con ello, la accionante requirió suspender —por vía cautelar— la aplicación de las normas impugnadas.

II. Las decisiones y los recursos.

1. El juez de primera instancia, con fecha 04/11/2024, dispuso una medida cautelar interina (art. 4º ley 26.854) por la que suspendió —hasta tanto se resuelva la tutela precautoria solicitada— las resoluciones dictadas por las demandadas.

Esta medida fue impugnada por el ENRE y el Estado Nacional.

2. Luego, el 08/11/2024, el a quo rechazó la petición del Estado Nacional tendiente a que se acumule la presente causa al proceso colectivo “Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina y Otros c. EN-M Economía-Secretaría de Industria y Comercio Dto. 293/2024 y otros s/ Amparo ley 16.986”, Expte. N° CAF 17.284/2024, en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría N° 6.

Contra dicha decisión el Estado Nacional presentó recurso de apelación.

3. Por último, en esa misma fecha, el magistrado acogió la medida cautelar requerida “(...) ordenando la suspensión de los efectos de la Resolución N° 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, y de la Resolución N° 708/2024 dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)”.

Asimismo, limitó su vigencia al plazo de seis (6) meses a partir de su notificación y de conformidad al artículo 200 inciso 1) del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, eximió a la parte actora de prestar caución juratoria.

Contra ese pronunciamiento, nuevamente las demandadas dedujeron recurso de apelación.

III Tratamiento de los recursos.

1. La decisión del 04/11/2024.

Respecto a este pronunciamiento, cabe señalar que los agravios formulados contra la medida cautelar interina han devenido abstractos pues el magistrado de grado acogió la tutela precautoria ratificando la medida interina oportunamente dictada, por lo que resulta inoficioso expedirse al respecto de los planteos recursivos incoados contra la decisión originaria (res. del 21/10/2024), en tanto ello implicaría pronunciarse sobre un conflicto litigioso que carece de actualidad (Fallos: 315:2093; 320:2603; 322:1436; 329:1898; y sus citas).

2. El pronunciamiento del 08/11/2024.

Las críticas expuestas por el Estado Nacional contra la decisión que rechazó la remisión de la presente causa no habrán de prosperar. Cabe destacar que el derecho de optar por la inclusión o exclusión en un proceso colectivo corresponde a la parte actora.

En este sentido, debe recordarse que el derecho de excluirse de un proceso colectivo, fue expresamente reconocido por la CSJN en el caso “Halabi” (Fallos: 332:111) y debe ser entendido, no sólo como una herramienta para garantizar el debido proceso, sino también, como una derivación del derecho de autonomía individual de los miembros del grupo (art. 18, 19 y 43 CN). Ello implica que aquellas causas planteadas en forma individual no corresponden, en principio, ser remitidas a un proceso colectivo en trámite.

Por lo demás, de la consulta realizada al Registro no se vislumbra que entre este expediente y el proceso colectivo registrado exista una sustancial semejanza que habilite la aplicación de las pautas previstas en el Reglamento de Procesos Colectivos.

En razón de las consideraciones precedentes, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el Estado Nacional.

### 3. La decisión del 08/11/2024.

Llegado el momento de resolver los recursos contra la medida cautelar, se adelanta que los agravios deducidos no habrán de ser receptados. Ello así por cuanto la cuestión traída a estudio es coincidente con la tratada y resuelta por esta Sala en la causa “Municipalidad de General Las Heras c. Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio y Otro s/ Amparo ley 16.986” (Expte. FLP 23.730/2024/CA1, resuelto en fecha 07/04/2025).

En efecto, en aquella oportunidad —luego de repasar los presupuestos para el otorgamiento de las medidas cautelares y rechazar la falta de legitimación procesal de la amparista— el Tribunal sostuvo que la ejecución de los actos administrativos involucrados pueden verosímilmente configurar una interferencia u obstaculización en la autonomía —económica y financiera— del municipio, al afectar la recaudación tributaria instrumentada mediante un mecanismo legalmente habilitado y que el peligro en la demora se advierte acreditado a través de las secuelas que derivarían de la intempestiva interrupción del mecanismo de recaudación de la TSG, cuyos fondos son destinados al funcionamiento de servicios esenciales que el municipio presta a su comunidad.

Asimismo, se señaló que la tutela precautoria no coincide con el objeto de la demanda y que no afecta el interés público de los usuarios y/o consumidores representados por la comunidad de la Municipalidad.

Se afirmó, también, que la dispensa de prestar contracautela por parte del municipio, se ajusta al texto procesal vigente (art. 200, inc. 1° Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por todo ello, se concluyó —dentro de la precariedad cognoscitiva propia de la instancia precautoria y sin que ello importe adelantar opinión sobre el fondo del asunto— que los elementos arrimados al expediente satisfacen los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar requerida.

Ahora bien, sin perjuicio de lo antes referido, las singulares circunstancias de la causa llevan al Tribunal a modificar el plazo otorgado a la medida cautelar dispuesta en primera instancia y a fijarlo en el término de tres (3) meses computados a partir de la notificación de la presente decisión.

En consecuencia, y como se adelantara, guardando sustancial analogía las causas, se resuelve: I) Declarar inoficioso pronunciarse sobre la decisión del 04/11/2024; II) Rechazar el recurso del Estado Nacional contra la providencia del 08/11/2024; III) Rechazar los recursos de apelación deducidos por las demandadas contra la resolución del 08/11/2024 y, en consecuencia, confirmar la medida cautelar ordenada, con los alcances dispuestos en el último párrafo del punto “III.3.” de este pronunciamiento, con costas de alzada por su orden (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Regístrese. Notifíquese. Firme que quede, devuélvase por conducto del Sistema Lex100, con comunicación a través de oficio electrónico al juzgado interviniente. — Carlos A. Vallefín. — Roberto A. Lemos.

---

## Información Relacionada